

**Asamblea General**

Septuagésimo primer período de sesiones

Documentos Oficiales

Distr. general
30 de noviembre de 2016
Español
Original: inglés

Tercera Comisión**Acta resumida de la 34ª sesión**

Celebrada en la Sede, Nueva York, el jueves 27 de octubre de 2016, a las 15.00 horas

Presidente: Sra. Mejía Vélez (Presidenta) (Colombia)
más tarde: Sra. Wegrzynowska (Vicepresidenta) (Polonia)
más tarde: Sra. Mejía Vélez (Presidenta) (Colombia)

Sumario

Tema 68 del programa: Promoción y protección de los derechos humanos
(*continuación*)

- b) Cuestiones de derechos humanos, incluidos otros medios de mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales
(*continuación*)
- c) Situaciones de los derechos humanos e informes de relatores y representantes especiales (*continuación*)

La presente acta está sujeta a correcciones. Dichas correcciones deberán enviarse lo antes posible, con la firma de un miembro de la delegación interesada, a la Jefa de la Dependencia de Control de Documentos (sccorrections@un.org), e incorporarse en un ejemplar del acta.

Las actas corregidas volverán a publicarse electrónicamente en el Sistema de Archivo de Documentos de las Naciones Unidas (<http://documents.un.org/>).

16-18768 (S)



Se ruega reciclar



Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.

Tema 68 del programa: Promoción y protección de los derechos humanos (continuación) (A/71/40 y A/C.3/71/4)

b) Cuestiones de derechos humanos, incluidos otros medios de mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales (continuación) (A/71/56,

A/71/254, A/71/255, A/71/269, A/71/271, A/71/273, A/71/278, A/71/279, A/71/280, A/71/281, A/71/282, A/71/284, A/71/285, A/71/286, A/71/287, A/71/291, A/71/299, A/71/302, A/71/303, A/71/304, A/71/305, A/71/310, A/71/314, A/71/317, A/71/319, A/71/332, A/71/344, A/71/344/Corr.1, A/71/348, A/71/358, A/71/367, A/71/368, A/71/369, A/71/372, A/71/373, A/71/384, A/71/385, A/71/405, A/71/567 y A/C.3/71/5)

c) Situaciones de los derechos humanos e informes de relatores y representantes especiales (continuación) (A/71/379-S/2016/788, A/71/540-S/2016/839, A/71/308, A/71/361, A/71/374, A/71/394, A/71/402, A/71/418, A/71/439, A/71/554 y A/C.3/71/5)

1. **El Sr. Haraszti** (Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Belarús) presenta su informe (A/71/394), que se centra en los derechos humanos en los procesos electorales en Belarús en el contexto de las elecciones presidenciales de 2015 y las elecciones parlamentarias de 2016. Acontecimientos positivos como una leve flexibilización de las normas que rigen los derechos de los candidatos a celebrar reuniones, la puesta en libertad de presos políticos y la firma de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, han suscitado esperanzas de que la situación de los derechos humanos en el país esté mejorando.

2. Hasta la fecha, sin embargo, no se han adoptado medidas concretas para modificar el marco jurídico opresivo muy arraigado o las prácticas restrictivas del aparato del Estado. Los derechos civiles o políticos de los presos políticos liberados no han sido restituidos, y la libertad de expresión, de asociación y de reunión sigue estando restringida. El orador destaca el caso de Eduard Palchys, que fue sido detenido en mayo 2016 debido a las opiniones expresadas en su blog, poniendo

fin al breve período durante el cual no hubo presos políticos en Belarús.

3. Si bien la elección al Parlamento de un miembro del partido de la oposición y un activista cultural independiente podría parecer constituir un progreso, es simplemente un cambio simbólico. Las elecciones siguen estando plenamente controladas por el Gobierno. Además, Belarús ha continuado llevando a cabo ejecuciones. El orador insta al Gobierno a que tome nota de las recomendaciones formuladas en los últimos 10 años por los diversos mecanismos de derechos humanos y reitera su compromiso de ayudar al Gobierno, así como las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos que trabajan en Belarús.

4. **La Sra. González Tolosa** (República Bolivariana de Venezuela), hablando en nombre del Movimiento de los Países No Alineados, dice que las cuestiones de derechos humanos deben abordarse mediante un enfoque constructivo y no politizado basado en el diálogo de una manera justa y equitativa, con objetividad y respeto por la soberanía nacional y la integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, la imparcialidad, la no selectividad y la transparencia como principios rectores. También deben tenerse en cuenta las particularidades políticas, históricas, sociales, religiosas y culturales de cada país. En la 17ª Cumbre del Movimiento de los Países No Alineados, que se celebró en septiembre de 2016, los Jefes de Estado y de Gobierno subrayaron que el Consejo de Derechos Humanos, órgano subsidiario de la Asamblea General, se encargaba de la consideración de situaciones de derechos humanos en todos los países mediante el mecanismo del examen periódico universal.

5. **La Sra. Belskaya** (Belarús) dice que su delegación está de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en que la concesión a los titulares de mandatos específicos para ciertos países de acceso a los Estados interesados podría proporcionar un medio de comunicación bilateral. Sin embargo, el diálogo con esos Estados debe comenzar en el momento de la concepción del mandato.

6. No hay necesidad de un Relator Especial sobre Belarús, y los recursos que se dedican al mandato se podrían utilizar mejor en otras esferas. Los mandatos

específicos para ciertos países aumentan el enfrentamiento y son un derroche de recursos. El informe del Relator Especial no contiene ninguna información nueva o sustantiva; la situación de los derechos humanos en Belarús no es diferente de la situación en los países que iniciaron el mandato, como se observa en los resultados del examen periódico universal.

7. Belarús sigue examinando todos los temas de derechos humanos con sus asociados. Las conversaciones entre el Presidente y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han redundado en el primer plan nacional de derechos humanos, que aplicará las recomendaciones de los órganos creados en virtud de tratados y el examen periódico universal. El plan abarca las recomendaciones de todos los órganos creados en virtud de tratados, como ha sugerido el Relator Especial.

8. Con respecto a las elecciones presidenciales y parlamentarias, el Relator Especial ha hecho caso omiso de las opiniones de los observadores independientes y no refleja ni las medidas que se han adoptado para mejorar las prácticas electorales, ni la labor que se ha realizado de conformidad con las recomendaciones de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Los cambios en el Código Electoral se introdujeron en 2015 y no en 2014, como señala el Relator Especial en su informe.

9. El pueblo de Belarús no necesita instrucciones sobre cómo vivir. Después de la segunda guerra mundial y la catástrofe de Chernobyl, ha podido construir un Estado fuerte. Está orgullosos de su país y sus políticas, que tienen por objeto mantener el alto nivel de vida de que gozan sus ciudadanos.

10. **La Sra. Brooke** (Estados Unidos de América) dice que si bien su delegación acoge con beneplácito su carácter pacífico, las recientes elecciones no han estado a la altura del compromiso internacional asumido por Belarús de garantizar unas elecciones libres y justas. El Gobierno de Belarús debe reformar sus procesos electorales de conformidad con las recomendaciones de la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Las reformas deberían incluir la inscripción de nuevos partidos políticos, la ampliación de la composición de las comisiones electorales y el aumento de la transparencia en el recuento de votos.

11. Es motivo de preocupación el hecho de que el Gobierno siga negando el derecho de reunión pacífica e imponiendo restricciones a los partidos de la oposición, la sociedad civil y los medios de comunicación independientes denegando arbitrariamente el permiso para la realización de actos e imponiendo multas a manifestantes pacíficos. En ese sentido, la oradora insta al Gobierno a que derogue el artículo 193.1 del Código Penal, que tipifica como delito las actividades de las organizaciones no registradas; y pregunta qué medidas inmediatas podría adoptar Belarús para mejorar el entorno operativo para las organizaciones de la sociedad civil.

12. **La Sra. Přikrylova** (República Checa), acogiendo con beneplácito las promesas formuladas por Belarús de cooperar con la sociedad civil y las organizaciones internacionales sobre cuestiones relacionadas con los procesos electorales, dice que se han hecho algunos progresos, especialmente en el tratamiento de los observadores nacionales e internacionales. No obstante, persisten problemas fundamentales, como la falta de transparencia en los procedimientos de recuento y de pluralismo en la composición de las comisiones electorales. La oradora insta a las autoridades de Belarús a apoyar a las organizaciones no gubernamentales en la supervisión de las elecciones y a conceder pleno acceso a los observadores nacionales a todas las etapas fundamentales del proceso electoral.

13. Se debe permitir a los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil hacer campaña libremente y celebrar reuniones. Belarús debería eliminar el procedimiento de inscripción de las asambleas basado en una autorización y flexibilizar su enfoque restrictivo a la inscripción de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, con miras a que los ciudadanos puedan participar libremente en la vida pública, que es una condición previa para la celebración de elecciones libres y justas.

14. **La Sra. Thomas** (Cuba) dice que las Naciones Unidas deben centrar sus esfuerzos en las esferas en las que existen claras violaciones de los derechos

humanos. La creación de un procedimiento especial para Belarús obedece a razones políticas. El informe no contiene ninguna información que justifique la continuación del mandato; en lugar de ello, se ponen en tela de juicio las instituciones políticas del país, que son soberanas.

15. Las cuestiones de derechos humanos deben abordarse de manera objetiva, imparcial y no selectiva. Si bien las democracias comparten características comunes, no existe un modelo único de democracia, y debe respetarse el patrimonio histórico, cultural y religioso de cada país. Su delegación se opone a los procedimientos especiales cuando tienen motivaciones políticas y no dimanen de verdaderos problemas de derechos humanos.

16. **El Sr. Torbergesen** (Noruega) dice que su delegación esperaba que la liberación de los presos políticos señalara la voluntad de las autoridades de hacer frente a los acuciantes problemas de derechos humanos. Para alentar a Belarús a adoptar nuevas medidas en la dirección correcta, Noruega se sumó a la Unión Europea en el levantamiento de las sanciones contra el país, pero al día siguiente dictó una nueva pena de muerte. Su delegación deplora que se siga aplicando la pena capital en Belarús e insta a las autoridades a que introduzcan una moratoria inmediata de la pena de muerte como primer paso hacia su abolición.

17. **La Sra. Kurbet** (Federación de Rusia) dice que su país no reconoce el mandato del Relator Especial sobre Belarús ni la resolución que lo estableció, ya que la deliberada insistencia en Belarús es ilegal y politizada. Lo mismo ocurre con el informe del Relator Especial, poniendo en entredicho la imparcialidad y la independencia del titular del mandato en la exposición de los hechos y la formulación de conclusiones y recomendaciones. La base de la afirmación del Relator Especial de que los derechos humanos en Belarús se violan sistemáticamente no está clara. Es inaceptable que el Relator Especial y los principales autores de la resolución contra Belarús traten de interferir en los procesos electorales de un Estado soberano.

18. El hecho de que Belarús atinada y justificadamente se niegue a colaborar con el Relator Especial no indica una falta de voluntad de cooperar con los procedimientos especiales en su conjunto, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos

Humanos (ACNUDH) u otros mecanismos de derechos humanos, como lo demuestra su participación en el examen periódico universal. La resolución y el mandato sobre Belarús desacreditan al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La continuación de la existencia del procedimiento especial, pese a la falta de apoyo de Belarús, no dará resultados positivos y es un derroche de recursos.

19. **La Sra. Birštunaitė** (Lituania) dice que los partidos políticos y los candidatos independientes deben poder hacer campaña libremente y celebrar debates para que los jóvenes puedan contribuir al desarrollo de una cultura política. En ese sentido, a su delegación le interesaría conocer la opinión del Relator Especial sobre la forma en que la comunidad internacional podría contribuir a la creación de una verdadera cultura política en Belarús.

20. Lamenta que Belarús no haya aplicado las recomendaciones formuladas por el Relator Especial, la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos y otros mecanismos de derechos humanos. La oradora insta a las autoridades a aplicar esas recomendaciones, velar por que la legislación electoral esté en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos y cooperar estrechamente con el Relator Especial. A ese respecto, pregunta si se ha avanzado en su trato con las autoridades y qué medidas deberían adoptarse para mantener un diálogo significativo.

21. **El Sr. Rohland** (Alemania) dice que a su delegación le preocupa la violación de los derechos laborales, en particular en los sectores de la silvicultura y la agricultura; la represión de la sociedad civil, incluidos los activistas, abogados y periodistas, en medio de un clima de impunidad; y el hecho de que se siga aplicando la pena de muerte. El orador insta al Gobierno de Belarús a que lleve a cabo las reformas electorales, mejore el respeto de los derechos humanos e imponga una moratoria sobre la pena de muerte. A la luz de la creciente disposición del Gobierno a entablar un diálogo sobre cuestiones de derechos humanos en el plano internacional, que es un paso positivo, sería interesante ver si se traduce en mejoras sobre el terreno, incluidas nuevas oportunidades para la sociedad civil y las víctimas de violaciones de los derechos laborales.

22. **La Sra. Duda-Plonka** (Polonia) dice que su delegación acoge con beneplácito la evolución positiva de la situación en Belarús, incluida la elaboración de un plan de acción nacional de derechos humanos. No obstante, preocupa a Polonia la persistencia de las violaciones sistémicas de los derechos humanos. La oradora pregunta qué medidas podría adoptar la comunidad internacional para alentar al Gobierno a abordar las deficiencias del proceso electoral, incluida la falta de transparencia en los procesos de inscripción y el recuento de votos. También le interesaría saber qué papel desempeñan las organizaciones de la sociedad civil en el proceso electoral y si ha habido algún cambio en ese sentido durante el curso del mandato del Relator Especial.

23. **El Sr. Araliyev** (Turkmenistán) dice que la situación en Belarús no requiere atención urgente o la supervisión por el Consejo de Derechos Humanos y no es necesario prorrogar el mandato del Relator Especial. Belarús ha demostrado su voluntad de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos: el país es parte en la mayoría de los instrumentos internacionales de derechos humanos y presenta informes periódicos nacionales para su examen por los órganos creados en virtud de tratados.

24. Su delegación acoge con beneplácito los esfuerzos del país por cooperar de manera constructiva con los órganos establecidos en virtud de tratados de derechos humanos, los organismos especializados de las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Consejo de Europa mediante la celebración de reuniones conjuntas sobre la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos en la práctica judicial.

25. **La Sra. Karabaeva** (Kirguistán) dice que su país acoge con beneplácito las medidas adoptadas por Belarús para abordar las cuestiones de derechos humanos. Kirguistán aprueba el sistema parlamentario de Belarús y su coherencia en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de los tratados internacionales. Desde mayo de 2016, en Belarús se han celebrado consultas para elaborar un programa de acción conjunto sobre los derechos humanos. Los difíciles problemas de derechos humanos solo pueden resolverse mediante el diálogo, la interacción constructiva y el respeto por las circunstancias culturales y geográficas específicas de un país.

26. **El Sr. Thinkeomeuangneua** (República Democrática Popular Lao) dice que los procedimientos dirigidos específicamente a un país no ayudan a abordar las cuestiones de derechos humanos y el examen periódico universal es el único mecanismo adecuado para ello. Su delegación hace un llamamiento a la comunidad internacional para que prosiga su positivo diálogo y colaboración con Belarús y alienta a Belarús a que siga cooperando con los mecanismos de derechos humanos en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

27. **La Sra. Laissue** (Suiza), observando la conclusión del informe de que las elecciones parlamentarias no han sido democráticas, dice que su delegación se pregunta si esas elecciones podrían ser contraproducentes al aparentar que se respetan los derechos humanos. Según el informe, la falta de violencia en relación con las recientes elecciones se debe a una cultura de represión y al temor de la desestabilización. A ese respecto, la oradora se pregunta cuán estable es realmente el país, a pesar de la paz aparente; a su delegación le interesaría conocer las opiniones del Relator Especial sobre el riesgo de inestabilidad a largo plazo. También pregunta si los dos miembros de la oposición electos tienen alguna influencia en el Parlamento y si su elección es una señal alentadora, a pesar de la naturaleza orquestada de la elección. Por último, observando que en el informe se formulan recomendaciones al Gobierno, la oradora pregunta si el Relator Especial tiene alguna recomendación que hacer a otros agentes.

28. **El Sr. Oña Garcés** (Ecuador) dice que su país apoya plenamente la labor del Consejo de Derechos Humanos, el órgano competente para examinar la situación de los derechos humanos. Deplorando el aumento del número procedimientos dirigidos a determinados países, dice que esas medidas tienen una motivación política, reflejan la aplicación de un doble rasero y violan los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad. Esas medidas no ayudan a promover y proteger los derechos humanos; por el contrario, socavan la cooperación internacional, la soberanía nacional y los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas existentes, como el examen periódico universal, que el Ecuador apoya plenamente.

29. **El Sr. Dehghani** (República Islámica del Irán) dice que su delegación sigue gravemente preocupada por el hecho de que se siga utilizando a la Tercera Comisión como plataforma para el examen de los informes procedentes de mandatos con motivos políticos, lo que revela un doble rasero y enfoques sesgados respecto de la promoción y protección de los derechos humanos.

30. Acogiendo con beneplácito las medidas positivas adoptadas por Belarús en la esfera de los derechos humanos, dice que las Naciones Unidas deben dedicar sus recursos, tiempo y energía a la protección genuina de los derechos humanos y abordar las violaciones y los infractores más graves. La causa contra Belarús no justifica un Relator Especial; el examen periódico universal es el foro adecuado para el examen de las cuestiones de derechos humanos en igualdad de condiciones con la plena participación de los países interesados.

31. **El Sr. Kelly** (Irlanda) dice que, si bien las recientes elecciones han sido pacíficas y estuvieron organizadas de manera eficiente, no ha habido mejoras sistémicas con respecto a los derechos humanos, los principios democráticos y el estado de derecho. No se han restituido a los presos políticos liberados sus derechos civiles o políticos y existen graves restricciones a la libertad de reunión, expresión y asociación, en particular los obstáculos a la inscripción de los partidos políticos.

32. Observando que esas restricciones significan que no puede considerarse que las elecciones se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos, el orador insta a Belarús a que aplique plenamente las recomendaciones del Relator Especial, la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos y el Consejo de Europa. Le interesa saber qué medidas debería adoptar el Gobierno de Belarús para garantizar la reforma real y sostenible del proceso electoral de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

33. **La Sra. Clayton** (Reino Unido) dice que, si bien las elecciones fueron pacíficas, distan de haber cumplido los compromisos internacionales. Su delegación tiene preocupaciones particulares sobre el marco jurídico restrictivo, el acceso de los candidatos a los medios de comunicación, la inscripción de votantes, la falta de transparencia y las irregularidades

en el recuento y la tabulación. Recordando que Belarús ha manifestado su voluntad de colaborar con la comunidad internacional, la oradora insta a las autoridades a aplicar las recomendaciones de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos y llevar a cabo reformas electorales amplias.

34. Observando que Belarús es el único país de Europa que todavía aplica la pena de muerte, la oradora también insta a las autoridades a conmutar todas las penas de muerte y decretar una moratoria sobre las ejecuciones como primer paso hacia la abolición de la pena de muerte.

35. El pleno disfrute del derecho a la libertad de opinión y expresión debería estar en la base de todo proceso electoral. El Reino Unido colaborará con otros asociados afines para alentar a las autoridades de Belarús a aplicar reformas para un proceso electoral más democrático y pluralista, y le interesaría conocer la opinión del Relator Especial sobre las prioridades pertinentes.

36. **El Sr. Mikayilli** (Azerbaiyán), reconociendo los esfuerzos realizados por Belarús para mejorar su historial de derechos humanos, dice que el país ha alcanzado casi todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se ha adherido a la mayoría de los instrumentos básicos de derechos humanos y está cumpliendo sus obligaciones en materia de presentación de informes, incluida la conclusión satisfactoria del segundo ciclo del examen periódico universal en 2015. Además, el Gobierno ha extendido una invitación al ACNUDH para visitar Belarús.

37. Esos logros, que no se reflejaron en el informe, son testimonio de la determinación del país de colaborar con el mecanismo de derechos humanos de las Naciones Unidas y merecen un mayor reconocimiento. Observando que las cuestiones de derechos humanos deben abordarse de manera imparcial, objetiva, no selectiva y no politizada, dice que los procedimientos específicos para un país no promueven los derechos humanos. En cambio, el examen periódico universal ha demostrado ser un mecanismo intergubernamental eficaz para abordar las cuestiones de derechos humanos. Es importante aplicar las recomendaciones que figuran en el informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal.

38. **El Sr. Zhemenev** (Kazajstán) dice que el informe no ofrece una visión amplia de la situación de los derechos humanos en Belarús. Debería haber incluido la cooperación constructiva y fortalecida entre Belarús, los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados y el ACNUDH. También se deberían haber reconocido debidamente los esfuerzos encaminados a mejorar la legislación nacional. El examen periódico universal ofrece una evaluación objetiva y fiable de todos los países y, en vista del aumento de la participación de Belarús, no hay necesidad de prolongar el mandato específico para el país.

39. **El Sr. Said** (Eritrea) dice que el examen periódico universal sigue siendo la mejor plataforma para mejorar la cooperación y la asociación en la promoción de los derechos humanos, ya que los mandatos específicos para determinados países están politizados y son conflictivos y contraproducentes. Solo sirven para vilipendiar y mostrar hostilidad a los países, mientras que descarrilan los esfuerzos para mejorar la situación de los derechos humanos. Los repetidos intentos de señalar las cuestiones de derechos humanos, en particular las resoluciones dirigidas específicamente a un país, a la Asamblea General constituyen una duplicación de esfuerzos y una utilización ineficaz de tiempo y recursos. Eritrea acoge con beneplácito las iniciativas adoptadas por el Gobierno de Belarús para mejorar los derechos humanos de sus ciudadanos.

40. **El Sr. Muhamedjanov** (Tayikistán) dice que las soluciones a los problemas de derechos humanos deberían basarse en la cooperación y el diálogo, y deberían ajustarse al marco jurídico internacional. Ese enfoque ayudaría a los Estados a cumplir sus obligaciones en virtud de los tratados internacionales y desarrollar sus instituciones nacionales.

41. **El Sr. Warraich** (Pakistán) dice que los Estados tienen la responsabilidad primordial de promover y proteger los derechos humanos de sus ciudadanos. Cualquier injerencia externa mediante medidas específicas para un país es contraproducente y contraria al espíritu de compromiso constructivo.

42. **El Sr. Haque** (Bangladesh) dice que las resoluciones dirigidas específicamente a un país no contribuyen a la mejora general de la situación de los derechos humanos de los países interesados, y no tienen en cuenta los diferentes niveles de desarrollo,

religiones, culturas o problemas nacionales. Las iniciativas adoptadas por Belarús son encomiables, en particular su plan de acción nacional de derechos humanos.

43. **El Sr. Shadiev** (Uzbekistán) dice que el mandato del Relator Especial no se ajusta plenamente al mandato del Consejo de Derechos Humanos para el diálogo cooperativo y en pie de igualdad con los Estados. Es inaceptable reemplazar el examen periódico universal con ese doble rasero, que no cumple las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad ni los principios de universalidad y objetividad. La resolución sobre Belarús es contraproducente y no ayudará a asegurar el disfrute ininterrumpido de los derechos humanos. En vista de la constante cooperación de Belarús con el Consejo de Derechos Humanos y otros órganos de las Naciones Unidas, no debe ser objeto de vigilancia o de procedimientos específicos para un país.

44. **El Sr. Forax** (Observador de la Unión Europea) dice que la concentración en los derechos humanos en los procesos electorales de Belarús es particularmente bienvenida. Es lamentable que el Gobierno de Belarús se haya negado a cooperar con el mandato. A pesar de algunos avances positivos, el orador observa con preocupación que los derechos políticos y civiles de los antiguos presos políticos no se han restablecido, lo que les impidió participar en las elecciones celebradas en septiembre 2016. El Gobierno debe llevar a cabo las reformas necesarias, en particular la abolición de la pena de muerte. Puesto que la legislación existente podría modificarse fácilmente para permitir la celebración de elecciones libres y justas, pregunta de qué manera la comunidad internacional puede alentar al Presidente de Belarús a participar en un diálogo serio sobre elecciones verdaderamente competitivas.

45. **El Sr. Yang Junzhi** (China) dice que su delegación se opone al establecimiento por la fuerza de medidas específicas para un país sin el consentimiento del país en cuestión. Al centrarse exclusivamente en los derechos civiles y políticos en Belarús, haciendo caso omiso de los progresos en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo, el informe no está en consonancia con los principios de objetividad, imparcialidad y subjetividad. Parte del informe socava la soberanía legislativa y judicial de Belarús, y

contraviene la Carta de las Naciones Unidas. La activa participación de Belarús en el examen periódico universal y su interacción con los órganos de derechos humanos y los Estados Miembros refleja su enfoque proactivo de la cooperación internacional y su dedicación a la promoción y protección de los derechos humanos de sus ciudadanos. La comunidad internacional debe examinar los progresos realizados por Belarús y entablar un diálogo constructivo para resolver las diferencias.

46. **El Sr. Ri Song Chol** (República Popular Democrática de Corea) dice que su delegación se opone a todas las medidas dirigidas específicamente a un país y basadas en motivaciones políticas y el enfrentamiento, que se emplean para interferir en los asuntos internos de los países y dividir a las sociedades. El derecho de todos los Estados a elegir y desarrollar sistemas políticos adecuados a su propio contexto debe respetarse y apoyarse.

47. *La Sra. Węgrzynowska (Polonia), Vicepresidenta, ocupa la Presidencia.*

48. **El Sr. Poveda Brito** (República Bolivariana de Venezuela) dice que los procedimientos especiales no deberían aplicarse sin el consentimiento del país de que se trate. La creación por motivos políticos de los instrumentos específicos de los países, los informes y las resoluciones viola los principios de la universalidad, la objetividad y la imparcialidad, y socava la credibilidad del Consejo de Derechos Humanos. El examen periódico universal debería utilizarse para facilitar la cooperación y sostener diálogos.

49. **El Sr. Qassem Agha** (República Árabe Siria) dice que su país rechaza categóricamente el informe del Relator Especial, que es un claro ejemplo de injerencia directa en los asuntos internos de los Estados. Además, en el informe se socava la credibilidad de los mandatos políticos y jurídicos en el ámbito de las relaciones internacionales, sobre todo teniendo en cuenta que ya se ha alcanzado un consenso internacional sobre un mecanismo para abordar las cuestiones de derechos humanos, a saber, el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos.

50. No está claro por qué se ha planteado esta cuestión ante la Comisión, a la cual le corresponde ocuparse de cuestiones sociales y humanitarias, ni por

qué se formulan acusaciones selectivas contra Estados que tienen sus propias culturas, costumbres y logros en la esfera de los derechos humanos.

51. El Relator Especial no tiene el mandato de observar las elecciones. De hecho, al poner en tela de juicio la credibilidad de las elecciones democráticas que se celebraron en Belarús en 2015 y 2016, en las que el pueblo de Belarús dejó en claro su voluntad, el Relator Especial ha excedido su mandato en un grado alarmante. La voluntad del pueblo de Belarús no debe ser objeto de las preocupaciones y recomendaciones del Relator Especial.

52. El Gobierno de la República Árabe Siria reafirma su posición de principio y rechaza categóricamente el uso selectivo de las cuestiones de derechos humanos como medio de interferir en los asuntos internos de los Estados bajo pretextos de carácter humanitario y jurídico.

53. **La Sra. Sabja** (Estado Plurinacional de Bolivia), hablando en nombre de su país y de Nicaragua, dice que su Gobierno se opone a la politización de los informes sobre países específicos y la aprobación selectiva de decisiones de los derechos humanos contra países del Sur. La promoción y protección de los derechos humanos solo pueden lograrse mediante la cooperación y el diálogo constructivo con los países interesados.

54. *La Sra. Mejía Vélez (Colombia), Presidenta, vuelve a ocupar la Presidencia.*

55. **El Sr. Haraszti** (Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Belarús) dice que el capítulo del Código Penal de Belarús que tipifica como delito algunas actividades podría abolirse de inmediato para representar y apoyar mejor los derechos de la sociedad civil. También compete al Presidente permitir la inscripción de las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil que actualmente no están inscriptas, ya que el continuo rechazo de las solicitudes de inscripción de las organizaciones más importantes penaliza sus actividades.

56. La supervisión de las elecciones se llevó a cabo de conformidad con las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 21 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Aunque se invitó a los observadores de la

OSCE a las elecciones celebradas en Belarús, en las elecciones parlamentarias, en particular, no se aplicaron las 32 recomendaciones formuladas por la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos, y solo se aplicaron parcialmente dos recomendaciones de procedimiento de menor importancia. Belarús podría mejorar sus elecciones cooperando plenamente con la OSCE y aplicando todas las recomendaciones.

57. Con respecto a los derechos laborales y la forma en que la cooperación internacional puede contribuir a mejorar los derechos de la sociedad civil, una solución simple sería permitir que las organizaciones internacionales de la sociedad civil participaran en mesas redondas para determinar de qué modo podría mejorarse la situación de los derechos humanos. El diálogo debe ser la base para la mejora de los derechos humanos, y el mandato del Relator Especial se basa en la cooperación y no la confrontación, el aislamiento o el antagonismo, como se ha afirmado. El orador está dispuesto a trabajar con Belarús, comenzando con la determinación de las cuestiones de derechos humanos en el país, y a ampliar la cooperación. Un paso importante podría ser que la delegación de Belarús proporcionara una copia del plan de acción recién dado a conocer como gesto de esa cooperación.

58. **La Sra. Keetharuth** (Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea), informando a la Comisión en su calidad de miembro de la antigua Comisión de Investigación sobre los Derechos Humanos en Eritrea, dice que esta ha concluido en su informe final ([A/HRC/32/47](#)) de junio de 2016 que hay motivos razonables para creer que funcionarios eritreos han cometido crímenes de lesa humanidad desde 1991. El Estado y oficiales militares y de las fuerzas de seguridad han cometido directa o indirectamente delitos de esclavización, encarcelamiento, detención y prisión arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, persecución, violación, violencia sexual, aborto inducido deliberadamente mediante agresión y asesinato. La Comisión ha identificado a los presuntos culpables y recopilado expedientes sobre ellos para contribuir a asegurar la rendición de cuentas en el futuro.

59. No ha habido cambios sustanciales que podrían mejorar la situación de los derechos humanos. Aún no hay Constitución, Parlamento, prensa libre ni

organizaciones no gubernamentales, y persiste la duración indefinida o arbitraria del servicio nacional. La población vive atemorizada y el Gobierno sigue controlando su vida cotidiana. El disfrute de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales por los eritreos es prácticamente imposible. El estado de derecho no es supremo. El Gobierno y sus agentes deben someterse a la ley; los ciudadanos cuyos derechos se vulneraron deben tener acceso a un tribunal debidamente constituido, independiente e integrado por magistrados profesionales que no teman las represalias. Las personas comunes no deben temer el arresto, la detención o la desaparición por utilizar el sistema de justicia.

60. El Gobierno de Eritrea ha denegado repetidas solicitudes de la Comisión para visitar el país y tener acceso sin trabas a diversos lugares para reunir información y realizar investigaciones. La Comisión basó sus conclusiones en información sustancialmente corroborada de muchas personas que han sufrido violaciones de los derechos humanos en Eritrea. La Comisión llegó a la conclusión de que el Gobierno no tenía ni la voluntad política ni la capacidad institucional para juzgar los crímenes que había documentado, y, por consiguiente, recomendó que el Consejo de Seguridad remitiera la situación a la Corte Penal Internacional y que la Unión Africana estableciera un mecanismo de rendición de cuentas. La Comisión también solicitó a los Estados Miembros que enjuiciaran o extraditaran a los sospechosos que se encontraran en sus territorios, y al Consejo de Seguridad que impusiera prohibiciones de viaje y congelara los activos de las personas sospechosas de delitos contra la humanidad.

61. En cuanto a su mandato como Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea, la oradora tiene la intención de centrarse en el próximo año en las medidas adoptadas para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes que se señalan en el informe. La Comisión recomendó que los Estados Miembros y las organizaciones internacionales siguieran vigilando a Eritrea hasta que se registraran progresos sistemáticos en materia de derechos humanos y constituyeran un elemento central de toda interacción con el Estado.

62. Aunque algunas delegaciones extranjeras, periodistas y otras personas recientemente invitadas a

Eritrea, entre ellos el ACNUDH, han informado de señales de creciente colaboración con la comunidad internacional, el Consejo de Derechos Humanos encomendó al Comité investigar las violaciones sistemáticas, generalizadas y graves de los derechos humanos que generalmente ocurrían en lugares aislados y a puerta cerrada. Lamentablemente, no ha observado ningún cambio sustancial en la situación de los derechos humanos de Eritrea.

63. El Gobierno se ha negado a cooperar con la Relatora Especial y la Comisión, y rechazó las conclusiones sobre las violaciones manifiestas de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. La negación de esas violaciones no es una buena estrategia y no permite que se aborden de manera cooperativa. La oradora espera que el fortalecimiento de los vínculos con Eritrea brinde un espacio para que los Estados Miembros y las organizaciones internacionales puedan ayudar al Gobierno a respetar sus obligaciones en virtud del derecho internacional y poner fin a las persistentes violaciones de los derechos humanos.

64. La Comisión recomendó que los Estados Miembros concedieran a los ciudadanos eritreos que huían del país estatuto de refugiados, respetaran el principio de no devolución y se abstuvieran de aplicar la repatriación forzosa. En general, la tasa de reconocimiento para los solicitantes de asilo eritreos en los países europeos sigue siendo elevada. Sin embargo, le preocupa el aumento de las denuncias de que se está repatriando a eritreos con una inadecuada supervisión de su situación posterior, ya que la Comisión ha documentado el arresto, la detención, los malos tratos y la tortura de personas repatriadas por la fuerza.

65. La oradora tiene la intención de cumplir su mandato promoviendo la aplicación de las recomendaciones con las personas que trabajan directamente con el Gobierno de Eritrea; continuando la cooperación con otros mecanismos de derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos; siguiendo de cerca los esfuerzos de Eritrea para aplicar las recomendaciones formuladas durante el segundo examen periódico universal; actualizando a la comunidad internacional sobre los cambios en la situación de los derechos humanos en Eritrea; y respondiendo a las represalias contra las personas que han cooperado con la Comisión o con su mandato

como Relatora Especial, con actividades de seguimiento apropiadas.

66. La oradora espera que la Asamblea General aborde la situación de los derechos humanos en Eritrea y presente el informe de la Comisión al Consejo de Seguridad, para su posible remisión a la Corte Penal Internacional. Al mismo tiempo, espera que la colaboración con el Gobierno de Eritrea contribuya a cambiar la vida de su pueblo. No puede permitirse que continúe la situación actual. Hay grandes expectativas de que la comunidad internacional escuche los llamamientos de las víctimas a que se haga justicia. La oradora asegura al Gobierno que sigue abierta a un diálogo genuino y constructivo y dispuesta a visitar el país antes de presentar su informe al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2017.

67. **El Sr. Poveda Brito** (República Bolivariana de Venezuela), hablando en nombre del Movimiento de los Países No Alineados, dice que las cuestiones relativas a los derechos humanos deben examinarse adecuadamente en un contexto mundial que evite el enfrentamiento, con objetividad y respeto por la soberanía nacional y la integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, y teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada país. El Movimiento reiteró su condena inequívoca de los intentos de socavar los derechos humanos y las libertades fundamentales, y destacó el papel del Consejo de Derechos Humanos y los órganos subsidiarios de la Asamblea General encargados de examinar la situación de los derechos humanos en todos los países en el marco del examen periódico universal sobre la base de la cooperación y el diálogo constructivo.

68. **El Sr. Gebreab** (Eritrea) dice que desea recordar a los delegados que el mandato de la Comisión de Investigación finalizó en el 31º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, celebrado en Ginebra en julio de 2016. El Consejo de Derechos Humanos es el foro internacional más adecuado para el debate de los derechos humanos sobre la base de la universalidad y la igualdad. Eritrea figura en el programa de la Tercera Comisión solo por el doble rasero y los enfoques selectivos y políticamente motivados específicos para un país.

69. Eritrea es un país seguro, pacífico y estable con un sistema político en evolución, que no obstante ha

sufrido retrocesos. Se está trabajando para crear un sistema de justicia centrado en la amplia participación popular, incluida la participación equitativa de las mujeres, en forma de tribunales de la comunidad elegidos a nivel local. Se están sentando gradualmente las bases para un crecimiento amplio, y los recursos disponibles se utilizan de manera prudente y eficaz. Si bien Eritrea favorece el diálogo, la participación y la cooperación a nivel internacional, la política de tratar de aislar y socavar el país ha limitado su función y privado al Cuerno de África de sus contribuciones positivas.

70. Poniendo de relieve la implicación y la responsabilidad nacionales, Eritrea concede prioridad a la movilización nacional de recursos humanos y financieros en la construcción de la nación, y observa el mismo principio en los derechos humanos. A pesar de la hostilidad y las dificultades, se está trabajando para promover los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de los eritreos, cuya esperanza de vida y calidad de vida han mejorado. Se imparte educación universal gratuita y se han hecho mejoras en la salud y los derechos de las mujeres y los niños. Las políticas sobre la ciudadanía, la unidad en la diversidad y la asignación de prioridad a las zonas y los sectores de la población desfavorecidos ha fortalecido la unidad nacional y la solidaridad.

71. Se espera que Eritrea alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible antes de lo previsto, construya una nación digna de los sacrificios que se han hecho para crearla, y contribuya a una región pacífica, cooperativa e integrada del Cuerno de África. Además de la participación en el proceso del examen periódico universal, Eritrea coopera eficazmente con las Naciones Unidas y sus órganos de derechos humanos, así como otros asociados, para aplicar las recomendaciones que ha aceptado. Eritrea es un participante decisivo y eficaz en la lucha contra la trata de personas y la búsqueda de soluciones a la migración irregular.

72. Eritrea ha sido tratada injustamente por las Naciones Unidas y el sistema internacional en los últimos seis decenios. Se ha respondido a la persistente ocupación de su territorio soberano con el silencio y las sanciones en su contra continúan a pesar del amplio reconocimiento de que carecen de fundamento y son injustificadas. Después de haber sido objeto de ataques

con respecto a los derechos humanos cuando se hace caso omiso de las violaciones de otros Estados, Eritrea pide equidad y alienta a la solidaridad y el apoyo mutuos.

73. **El Sr. Thant Sin** (Myanmar) dice que los esfuerzos de promoción y protección de los derechos humanos deben basarse en la cooperación y el diálogo genuino. La estabilidad política y social es fundamental para el desarrollo general de Eritrea. Myanmar sigue confiando en que el mecanismo de examen periódico universal, en el que todos los Estados están en pie de igualdad, proporciona el marco más apropiado para fortalecer la cooperación internacional en materia de derechos humanos. El orador alienta a Eritrea a continuar su colaboración con la comunidad internacional en la aplicación de las recomendaciones aceptadas del examen periódico universal.

74. **El Sr. Forax** (Observador de la Unión Europea) dice que la Unión Europea sigue muy preocupada por la situación de los derechos humanos en Eritrea, donde hay motivos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad. El orador reconoce los recientes acontecimientos positivos, como la disminución de las condenas a muerte y la concesión de acceso a una delegación del ACNUDH, que se espera sea un paso hacia la plena cooperación en materia de derechos humanos con la comunidad internacional y a todos los órganos de las Naciones Unidas. Se necesitan mejoras sustanciales en la situación de los derechos humanos y la rendición de cuentas por los crímenes y las violaciones de los derechos humanos, y hacen falta reformas jurídicas e institucionales que proporcionen un marco constitucional, mejoren el estado de derecho, pongan fin al servicio nacional indefinido y aborden las preocupaciones sobre el trabajo forzoso.

75. **El Sr. Doualeh** (Djibouti) dice que su país condena las violaciones sistemáticas, generalizadas y graves de los derechos humanos en Eritrea en un clima de impunidad generalizada, y lamenta profundamente la persistente negativa del Gobierno a cooperar con la Comisión de Investigación y la Relatora Especial. El orador pide a la Relatora Especial que dé más detalles sobre las medidas que podrían adoptar los órganos pertinentes de las Naciones Unidas para aplicar las recomendaciones de la Comisión de Investigación, y

sobre un mecanismo regional para abordar la rendición de cuentas en Eritrea. También pregunta si la Relatora Especial cuenta con recursos suficientes para cumplir su mandato, y solicita detalles de las investigaciones sobre los 13 prisioneros de guerra de Djibouti que están en las cárceles eritreas desde 2008.

76. **La Sra. Brooke** (Estados Unidos de América) dice que su país alienta enérgicamente al Gobierno de Eritrea a que responda de manera positiva a los titulares de mandatos de las Naciones Unidas que han solicitado una visita, incluida la Relatora Especial y a cooperar con sus esfuerzos encaminados a promover los derechos humanos en ese país. Los Estados Unidos de América están muy preocupados por las denuncias de detención arbitraria y severas restricciones al ejercicio de la libertad de religión o de creencias. Pregunta por la situación del compromiso del Gobierno de limitar la duración del servicio nacional a 18 meses, desarrollar un poder judicial independiente y transparente, y poner en libertad a las personas que han sido detenidas arbitrariamente. También pregunta cómo la comunidad internacional podría presionar eficazmente al Gobierno para que aplique su Constitución, celebre elecciones nacionales y cumpla esos compromisos.

77. **El Sr. Tumbare** (Zimbabue) dice que ningún país ha alcanzado la perfecta realización de los derechos humanos de su población y, en consecuencia, ninguno tiene la autoridad moral para condenar los problemas de derechos humanos de otros o menospreciar los esfuerzos de un país para promover los derechos humanos. Cuando uno o más países asumen la función de inspector de los derechos humanos, polarizan el debate y reducen el examen de la cuestión a la mera politiquería. Zimbabue reafirma su oposición a los mandatos específicos para determinados países que promueven el doble rasero y tratan de institucionalizar el tratamiento selectivo. La creación de un mandato para el país sin el consentimiento del país afectado no es propicia para el diálogo constructivo y la cooperación, complica la labor de los titulares de mandatos y socava el equilibrio de sus informes. Zimbabue considera que el examen periódico universal sigue siendo el mejor foro para examinar la labor de defensa de los derechos humanos de todos los Estados de manera imparcial y en pie de igualdad.

78. **El Sr. Glossner** (Alemania) dice que encomia la voluntad de Eritrea de colaborar con el ACNUDH, e insta al Gobierno a que siga cooperando con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unión Europea en la aplicación de las recomendaciones del examen periódico universal. Sin embargo, Alemania sigue muy preocupada por la situación de los derechos humanos, ya que en el informe no se señalan mejoras respecto de las violaciones de los derechos humanos más fundamentales y se menciona solo una cooperación selectiva con los órganos de las Naciones Unidas. Insta al Gobierno a adoptar medidas para aplicar las reformas jurídicas e institucionales y asegurar la rendición de cuentas de los autores de los delitos que se han cometido y se siguen cometiendo.

79. **El Sr. Almazrauei** (Emiratos Árabes Unidos) dice que su país acoge con agrado la colaboración constructiva de Eritrea con las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos. Es importante tener en cuenta las medidas positivas adoptadas por Eritrea, incluida su aceptación de 92 recomendaciones formuladas durante el segundo ciclo del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos, la creación de un mecanismo para aplicar esas recomendaciones, y la firma por el Gobierno de un acuerdo con las Naciones Unidas para acelerar su aplicación. Los Emiratos Árabes Unidos también encomian la colaboración de Eritrea con el ACNUDH y los relatores especiales de las Naciones Unidas, así como su cooperación activa con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

80. Los Emiratos Árabes Unidos consideran que todas esas medidas positivas subrayan el compromiso de Eritrea con el fortalecimiento y la promoción de los derechos humanos en el país, y confía en que continuará trabajando constructivamente con las Naciones Unidas y sus organismos especializados con ese fin.

81. **El Sr. Oña Garcés** (Ecuador) dice que su país apoya plenamente la labor del Consejo de Derechos Humanos, el órgano competente para examinar la situación de los derechos humanos. El Ecuador lamenta que sigan existiendo numerosas prácticas basadas en objetivos políticos y el doble rasero, que no promueven ni protegen los derechos humanos, sino que socavan las relaciones entre los Estados, el diálogo

constructivo, la cooperación internacional y mecanismos cuidadosamente diseñados como el examen periódico universal.

82. **El Sr. Zewdie** (Etiopía) dice que su delegación agradece el valiente compromiso y decisión de la Relatora Especial en la presentación de informes sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Eritrea, y le desea el mayor éxito en el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Investigación.

83. **El Sr. Yang Junzhi** (China) dice que su delegación se opone al establecimiento por la fuerza de medidas específicas para un país sin el consentimiento del país en cuestión. Eritrea ha hecho progresos constantes en materia de derechos humanos, ha cooperado activamente con los órganos de derechos humanos, y participó en dos exámenes periódicos universales, aceptando 92 de las recomendaciones resultantes y acelerando su aplicación. China insta a la objetividad, la evaluación justa, la paciencia y la diplomacia a la hora de examinar los problemas de Eritrea, como país en desarrollo, en la promoción y protección de los derechos humanos. La comunidad internacional debe entablar un diálogo constructivo y prestar a Eritrea más asistencia técnica y apoyo a la creación de capacidad.

84. **El Sr. Torbergson** (Noruega) hace hincapié en la necesidad de dar un seguimiento adecuado a la aplicación de las resoluciones sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea. El Gobierno de Eritrea debería promulgar la Constitución de 1997 y velar por que se respeten los derechos humanos de conformidad con sus obligaciones internacionales. Es preciso que colabore con la comunidad internacional y las Naciones Unidas; en particular, debería conceder un mayor papel al ACNUDH, de conformidad con la solicitud formulada por el Consejo de Derechos Humanos, y considerar la posibilidad de invitar al ACNUDH a establecer una oficina en Eritrea. Además, el Gobierno debería considerar la posibilidad de cursar invitaciones a los relatores especiales que se ocupan de los derechos civiles y políticos. Su Gobierno sigue comprometido a fortalecer su colaboración con Eritrea, incluso mediante la prestación de asistencia para la aplicación de las recomendaciones surgidas del examen periódico universal. Pregunta qué medidas debe

adoptar el Gobierno de Eritrea para mejorar la situación de los derechos humanos.

85. **La Sra. Thomas** (Cuba) dice que el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos es el mecanismo adecuado para promover y proteger los derechos humanos. Por consiguiente, su Gobierno sigue oponiéndose a los procedimientos dirigidos a determinados países, que, dicho sea de paso, siempre se aplican contra los países del Sur. Se debería dar otra oportunidad a las organizaciones regionales y subregionales de África interesadas para tratar de resolver los problemas en Eritrea.

86. **La Sra. Belskaya** (Belarús) reitera la posición de su país de que los mandatos específicos para un país crean barreras artificiales al diálogo constructivo con los Estados interesados, al tiempo que vulneran el principio de la objetividad y agudizan la confrontación. Además de la visita al país realizada por el ACNUDH, Eritrea ha hecho encomiables esfuerzos para cumplir las recomendaciones del examen periódico universal y firmar un acuerdo con los órganos de las Naciones Unidas establecidos en virtud de tratados. El diálogo con Eritrea debería llevarse a cabo sin ninguna influencia externa o presión del mandato para el país.

87. **La Sra. Sabja** (Estado Plurinacional de Bolivia), hablando también en nombre del Gobierno de Nicaragua, dice que es preocupante que la Tercera Comisión siga plegándose a la voluntad de algunos Estados Miembros, nombrando a relatores especiales sobre determinados países en desarrollo como medio para aplicar presión política. Esa práctica viola los principios de objetividad y universalidad. La situación de los derechos humanos en países concretos no debería ser examinada por la Tercera Comisión, sino abordada por las partes interesadas mediante la cooperación y el diálogo. El Consejo de Derechos Humanos es el órgano de las Naciones Unidas con el mandato de examinar las cuestiones relativas a los derechos humanos en todos los países, en el proceso del examen periódico universal, que se basa en los principios de no selectividad, imparcialidad, objetividad y universalidad.

88. **La Sra. Clayton** (Reino Unido) dice que, si el éxodo de eritreos ha de terminar, es necesario abordar las violaciones de los derechos humanos y la falta general de oportunidades económicas. El Reino Unido está trabajando con el Gobierno de Eritrea para mejorar

la situación de los derechos humanos en el país. Entre los cambios que su Gobierno espera ver figuran la enmienda del servicio nacional indefinido, la plena aplicación de la Constitución Nacional y la cooperación con los órganos internacionales de derechos humanos. El Gobierno de Eritrea debería aprovechar sus recientes avances, en particular cumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que incluyen la cooperación con la Relatora Especial. La oradora pregunta de qué manera la comunidad internacional podría ayudar al Gobierno de Eritrea a aplicar plenamente su Constitución revisada y fortalecer el respeto de los derechos humanos en el país.

89. **El Sr. Haque** (Bangladesh) dice que las resoluciones sobre países específicos son ineficaces y no tienen en cuenta características nacionales como los niveles de desarrollo, la historia religiosa, la cultura y dificultades singulares. El Gobierno de Eritrea debe ser encomiado por las medidas que ha adoptado para proteger y promover los derechos humanos y por su compromiso constructivo con los países y las organizaciones, incluidos el Consejo de Derechos Humanos y el ACNUDH.

90. **La Sra. Laissue** (Suiza) exhorta al Gobierno de Eritrea a que adopte de inmediato medidas concretas para poner fin a las continuas violaciones graves de los derechos humanos. Los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos facilitan el fortalecimiento tangible del respeto de los derechos humanos en los países, pero para que funcionen, la Relatora Especial debe tener acceso sin restricciones a Eritrea.

91. La oradora pregunta de qué modo la Relatora Especial garantizaría el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Investigación sobre los Derechos Humanos en Eritrea, habida cuenta de que no ha tenido acceso al país, y cómo podrían apoyarla los Estados Miembros para que pueda cumplir su mandato. Pregunta si la Relatora Especial tiene la intención de tomar medidas concretas para aprovechar al máximo la relativa apertura demostrada por el Gobierno de Eritrea, en su último examen periódico universal, con respecto al seguimiento de la aplicación de determinadas recomendaciones.

92. **La Sra. Kurbet** (Federación de Rusia) reitera su oposición a las resoluciones politizadas sobre países específicos de los órganos de las Naciones Unidas establecidos en virtud de tratados. Esas medidas contraproducentes y hostiles desacreditan a la labor de las Naciones Unidas y no se ajustan a los principios de cooperación, no selectividad, imparcialidad y objetividad. Como las medidas no mejoran la situación de los derechos humanos en el terreno, se debería establecer en lugar de ellas una estrecha cooperación entre los Estados y un diálogo profesional, respetuoso y calmo. El examen periódico universal es lo más adecuado para facilitar un entorno no politizado y constructivo para examinar la situación de los derechos humanos y ayudar a los países a cumplir sus obligaciones. La comunidad internacional podría alentar esas aspiraciones manteniendo diálogos con los países, en lugar de aislarlos.

93. **La Sra. Arshad** (Pakistán) dice que los Estados son responsables de proteger los derechos humanos de sus ciudadanos, de conformidad con sus obligaciones internacionales. La injerencia externa mediante los mandatos específicos para un país es contraproducente. Su delegación acoge con agrado el compromiso del Gobierno de Eritrea de cumplir sus obligaciones internacionales, como lo demuestra su participación en el proceso del examen periódico universal, y espera que siga avanzando.

94. **La Sra. Ndayishimiye** (Burundi) dice que los mandatos y las comisiones de investigación dirigidos a países específicos son contraproducentes. Su delegación está preocupada por el uso de los instrumentos de derechos humanos por motivos políticos. El examen periódico universal es el mecanismo apropiado de las Naciones Unidas para mejorar el respeto de los derechos humanos; es constructivo y tiene probabilidades de producir resultados en Eritrea, así como en otros países. La politización de las cuestiones de derechos humanos y la selectividad de países específicos conduce a conflictos, que, de hecho, obstaculizan el desarrollo de los países de que se trate.

95. **El Sr. Dehghani** (República Islámica del Irán) reitera la posición de principio de su Gobierno: la práctica duplicativa, por motivos políticos, de examinar las situaciones específicas de los países en la Tercera Comisión atenta contra los principios de

imparcialidad, la universalidad, la no selectividad y la no injerencia, y socava la cooperación y el diálogo entre los Estados. El examen periódico universal es el mecanismo apropiado para examinar la situación de los derechos humanos en todos los Estados Miembros, sobre una base de igualdad y con la participación plena de sus gobiernos.

96. **El Sr. Moussa** (Egipto) dice que en la cumbre del Movimiento de los Países No Alineados de septiembre de 2016, los Jefes de Estado y de Gobierno reiteraron su preocupación por la aprobación selectiva de resoluciones sobre determinados países por la Tercera Comisión, así como por el Consejo de Derechos Humanos. El examen periódico universal es el principal mecanismo de cooperación intergubernamental para el examen de las cuestiones de derechos humanos a nivel nacional, y se estableció para eliminar la subjetividad, la politización y los dobles raseros. El respeto de los derechos humanos debe reforzarse mediante un proceso cooperativo y no hostil de creación de capacidad en los Estados para proteger los derechos humanos, de conformidad con sus obligaciones internacionales y sin interferencias.

97. **La Sra. Sánchez de González** (Venezuela) reafirma su desaprobación de la aplicación de procedimientos especiales sin el consentimiento y la participación de los Gobiernos interesados. La adopción por motivos políticos de instrumentos o resoluciones sobre los derechos humanos constituye una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de la objetividad, la no selectividad, la imparcialidad y la universalidad. Además, con esas medidas se corre el riesgo de socavar la credibilidad del Consejo de Derechos Humanos, cuyo examen periódico universal es el mecanismo apropiado para la cooperación en el examen de las cuestiones de derechos humanos.

98. **El Sr. Gebreab** (Eritrea) expresa su agradecimiento al Movimiento de los Países No Alineados y a todos los Estados que han adoptado una posición de principios, por su solidaridad. Los Estados que han hecho acusaciones infundadas contra su Gobierno deberían ajustar sus opiniones, tratar de cooperar con su Gobierno y dejar de aplicar un doble rasero al examinar las cuestiones de derechos humanos.

99. El Gobierno de Etiopía no está en condiciones de criticar al Gobierno de Eritrea, ya que sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad. Asesina a su propio pueblo, y ha encarcelado a decenas de miles de sus ciudadanos, ha eliminado la libertad de expresión y declarado la ley marcial. El examen de Eritrea por la Tercera Comisión, mientras el Gobierno de Etiopía comete esas atrocidades, demuestra la existencia de un doble rasero.

100. **El Sr. Zewdie** (Etiopía) dice que los recientes disturbios en Etiopía son la consecuencia de políticas adoptadas por el Gobierno de Eritrea, que trata de desestabilizar la región del Cuerno de África para seguir entrenando a terroristas y desplegarlos en Etiopía y en la región en general. No obstante, la situación de su país no es pertinente: el actual tema del programa trata de Eritrea y sus progresos.

101. **La Sra. Keetharuth** (Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea) dice que, como muchos representantes han puesto de relieve, el Gobierno de Eritrea ha comenzado a colaborar de manera constructiva con la comunidad internacional y las Naciones Unidas. Sin embargo, es fundamental que cualquier participación conduzca a mejoras tangibles para el pueblo de Eritrea, se base en el respeto de los derechos humanos, ponga fin a la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos y se traduzca en medidas concretas, con plazos definidos, como abrir las puertas de las prisiones donde hay personas que han permanecido recluidas en régimen de incomunicación durante más de 15 años. El Gobierno debe comprometerse a adoptar medidas concretas para resolver los problemas relacionados con el trabajo forzoso, las prisiones aisladas y el servicio nacional obligatorio. Además, debe fomentar la confianza, no solo de la comunidad internacional, sino de su propio pueblo. Las personas deben tener la libertad de elegir cómo vivir: el sistema educativo no debe encaminar a los eritreos al servicio nacional, por ejemplo. Existen complejos vínculos entre las actuales violaciones de los derechos humanos, el desarrollo y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. El desarrollo no otorga a los gobiernos licencia para violar los derechos de su propio pueblo.

102. La oradora ha proporcionado en su informe detalles de cómo se propone dar efecto a las recomendaciones de la Comisión de Investigación. El

Gobierno de Eritrea no debe ser selectivo en la concesión de acceso al país a los órganos de las Naciones Unidas. Es cierto que el Gobierno ha permitido el acceso del ACNUDH a una prisión, pero se trata de una cárcel modelo, que no es representativa, y solo se permitió el acceso durante 15 minutos: la observación real de las condiciones de detención lleva mucho más tiempo. La oradora seguirá ejerciendo su mandato con energía para dar voz a los ciudadanos eritreos en el marco de las Naciones Unidas.

103. **El Sr. Lynk** (Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, presentando su informe (A/71/554), dice que el Gobierno de Israel no ha presentado ninguna respuesta por escrito a su solicitud de autorización para visitar Israel y el Territorio Palestino Ocupado. Sin embargo, la cooperación de todos los Estados es una obligación fundamental de los miembros de las Naciones Unidas, basada en los Artículos 104 y 105 de la Carta de las Naciones Unidas y en el artículo VI (sección 22) de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.

104. Entre las cuestiones preocupantes que merecen atención, señala el gran aumento de la violencia en la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental durante los últimos 12 meses. La mayor parte de la violencia está dirigida contra los civiles, y hay escasa rendición de cuentas. Se ha registrado un alarmante aumento del uso de la detención administrativa, en particular de niños palestinos menores de 18 años. Otra cuestión es la aplicación de castigos colectivos, especialmente la reanudación de la práctica de las demoliciones punitivas de viviendas, los cierres geográficos de partes del Territorio Palestino Ocupado y los traslados forzados en la zona C de la Ribera Occidental. Por último, la población del Territorio no ha podido ejercer su derecho al desarrollo. Carece de acceso de tránsito seguro, ya sea por tierra, mar o aire, al mundo exterior. Todas sus fronteras, con una excepción, están controladas por Israel; por consiguiente, la capacidad de los palestinos para desplazarse libremente y para poder comerciar con el mundo y entre sí está gravemente limitada. Por otra parte, a causa de los recortes del suministro de energía y de agua, las condiciones de vida en los territorios son casi insostenibles.

105. Su principal recomendación es que Israel ponga fin a la ocupación lo antes posible. Es imposible justificar su continuación desde el punto de vista jurídico o de cualquier medida de justicia, e imposible separar la ocupación de las diversas violaciones de los derechos humanos y humanitarios que afectan al conflicto. A pesar de lo sombrío de la situación, hay cierta esperanza en una comunidad dinámica de defensores de los derechos humanos y trabajadores humanitarios que siguen trabajando para mejorar la existencia de las personas que viven en el Territorio Palestino Ocupado; si una paz justa y compasiva llega alguna vez al Oriente Medio, se deberá en gran parte a esos valerosos defensores.

Se levanta la sesión a las 17.55 horas.